

Carta abierta sobre la violencia política posibilitada por la tecnología en Venezuela

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes y miembros de la comunidad internacional de derechos humanos, hacemos un llamado urgente a que el pueblo venezolano tenga acceso sin restricciones a internet, a las plataformas de redes sociales y a otros canales de comunicación en todo momento. También exigimos que se ponga fin al uso de herramientas tecnológicas y plataformas digitales para la vigilancia y persecución de la disidencia política, en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este compromiso es crucial para respetar los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela y los compromisos internacionales del país.

La [crisis en Venezuela](#), que estalló tras las recientes elecciones presidenciales, ha supuesto un importante despliegue del aparato de vigilancia y control que el Estado venezolano ha construido en los últimos años, que se entrecruza con diversos elementos relacionados con las tecnologías de la comunicación y que ha sido denunciado reiteradamente por la sociedad civil y las organizaciones que defienden la libertad en Internet en el país. El gobierno de Nicolás Maduro [afirma](#) haber detenido a más de 2.000 personas en la última semana y las cifras de muertos y desaparecidos no son claras, ya que la mayoría de las fuentes indican que [al menos 20 personas han muerto en las protestas](#), mientras que otras 25 han sido desaparecidas. Estamos siendo testigos de las consecuencias de un sistema complejo creado por más de 20 años de políticas públicas e iniciativas políticas insidiosas, que combina múltiples restricciones al acceso a la información mediante la censura, el deterioro de la infraestructura de comunicaciones, el acoso sistemático, los operativos de información y el cierre de medios de comunicación, además de emplear tecnologías de vigilancia aplicadas a intrincadas redes de intereses y, en muchos casos, a una población acorralada por la pobreza.

El entorno sociopolítico de Venezuela se caracteriza por una compleja interacción de autoritarismo, inestabilidad económica y malestar social. Bajo el gobierno de Maduro, el Estado ha recurrido cada vez más a medidas represivas para mantener el control, incluida la vigilancia generalizada, la censura y la supresión de la disidencia. Como lo han demostrado las recientes elecciones presidenciales, una parte dominante y cada vez mayor de la población se siente agraviada por la mala gestión del partido gobernante y los abusos de los derechos humanos. Las condiciones económicas siguen siendo nefastas, debido a los efectos de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos y la pobreza generalizada que exacerban la crisis. Estos desafíos han alimentado un creciente sentimiento de descontento y rebeldía entre los venezolanos, lo que ha dado lugar a frecuentes protestas y a una cifra cada vez mayor de [7,8 millones de personas que han huido](#) del país en busca de mejores oportunidades en el extranjero o intentando escapar de la violencia política. En este clima, el gobierno ha seguido aumentando su control sobre la población a través de medios digitales y físicos, erosionando aún más las normas democráticas y limitando las vías para la oposición pacífica.

La tecnología tras las elecciones

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, se ha producido una violenta represión por parte de la policía, el ejército y grupos paramilitares, así como denuncias de estrategias de acoso y persecución posibilitadas por el uso de la tecnología. El gobierno ha intensificado sus medidas de

vigilancia y censura digital, utilizando herramientas como la aplicación de mensajería VenApp para informar sobre actividades disidentes y revelar información confidencial a manifestantes, videovigilancia para monitorear las protestas y drones patrullaje para provocar miedo generalizado.

VenApp representa la última evolución de este aparato de vigilancia. La aplicación, que ha suscitado importantes preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia estatal desde su lanzamiento en diciembre de 2022, ahora ha sido [promovida](#) por el presidente Nicolás Maduro como un medio para que los ciudadanos denuncien a sus vecinos, afianzando aún más una cultura de vigilancia y control. Ahora incorpora funciones que permiten a los usuarios alertar a las autoridades sobre actividades consideradas sospechosas por el Estado, que abarcan categorías como “guarimba fascista” (término utilizado para describir las protestas de la oposición), saqueos, desorden público e incluso “desinformación”, dirigida a periodistas. La integración de las plataformas digitales a las prácticas de persecución del [chavismo](#) sigue un patrón de décadas de creación de un sistema de castigos y recompensas para obtener inteligencia social a través de acusaciones de disidencia política, incrustado en la sociedad a través de una estructura de “jefes callejeros” del partido local y soplones conocidos como “Patriotas Cooperantes”. Al considerar a cualquier demócrata que desafíe su poder como un potencial conspirador o desestabilizador, el gobierno ha fomentado un entorno de desconfianza y vigilancia, apuntando a quienes percibe como enemigos internos.

Hay informes frecuentes de que las fuerzas de seguridad detienen a ciudadanos para verificar el contenido de sus teléfonos, incluidas fotos, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp. Las personas son detenidas en función del contenido encontrado durante estos registros, incluidas fotos o discusiones sobre protestas o ejemplos de discursos antigubernamentales.

Este marco ha evolucionado con la implementación del Carnet de la Patria y el Sistema Patria, que son sistemas de identificación digital vinculados a programas de bienestar social. Estos sistemas no sólo rastrean las actividades de los ciudadanos, sino que también recogen grandes cantidades de datos personales, a menudo sin consentimiento. El [sistema de vigilancia](#) depende directamente de la Oficina del Presidente. El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, que está bajo la supervisión directa del Presidente, es responsable de supervisar todas las operaciones de seguridad del Estado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encarga de monitorear las comunicaciones telefónicas y el tráfico de Internet. El Sistema Patria es parte de la Fundación Patria, que depende de la Vicepresidencia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), una fuerza de seguridad responsable de la inteligencia política y la contrainteligencia, así como la Dirección de Contrainteligencia Militar, tienen acceso directo al monitoreo telefónico y la vigilancia de las calles.

Redes sociales y tecnología para vigilancia

Además, las fuerzas de seguridad han estado monitoreando activamente las redes sociales y pidiendo a sus partidarios que denuncien cualquier actividad disidente en línea, con el fin de [detener a personas y allanar casas](#) y oficinas sin orden judicial. A estas personas se les niega luego el acceso a un juicio justo y equitativo, y se las coloca en “[centros de reeducación](#)” donde, en palabras de Nicolás Maduro, “no habrá perdón”. Esto ocurre en el contexto de lo que se conoce

como “[Operación Tun Tun](#)”, que incluye el uso de cuentas de Instagram, Telegram y X (antes Twitter) para revelar nombres, fotos y direcciones de disidentes, en particular de activistas y periodistas, pero también de ciudadanos comunes que sirvieron como testigos en los centros de votación durante las elecciones. A menudo, el doxing lo hacen sus propios vecinos.

Los líderes políticos del gobierno de Maduro han estado usando sus cuentas de redes sociales, así como los medios nacionales, para exponer e intimidar a los disidentes, como lo ilustra el hombre fuerte del chavismo, [Diosdado Cabello, al revisar los tuits de los usuarios](#) en su programa de televisión.

Esta represión digital no sólo limita los derechos fundamentales de los venezolanos, sino que también pone de relieve la dependencia del régimen de la tecnología como medio para mantener el poder y sofocar el disenso en un entorno políticamente volátil. Las consecuencias de las elecciones ponen de relieve una estrategia más amplia de autoritarismo digital, en la que el Estado utiliza tecnologías avanzadas para imponer el cumplimiento de las normas y silenciar a la oposición.

Además, el gobierno venezolano lleva muchos años utilizando tecnología de vigilancia para perseguir a la disidencia. [La empresa tecnológica china ZTE ha estado exportando tecnología de vigilancia](#) a Venezuela al menos desde 2016, y en 2021, el gobierno de Maduro admitió públicamente poseer [tecnología de piratería telefónica fabricada por la firma israelí Cellebrite](#), utilizada para intervenir y vigilar los dispositivos de los disidentes. En 2022, Telefónica, que opera en Venezuela como Movistar, [informó](#) haber interceptado las comunicaciones de más de 1,5 millones (1.584.547) de abonados en Venezuela durante el año anterior, lo que representa uno de cada cinco usuarios de líneas telefónicas o de internet.

Censura y filtrado de Internet

Según informó la ONG venezolana *Conexión Segura y Libre*, durante la campaña electoral se registraron al menos 12 nuevos casos de bloqueos contra medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y una VPN, sin contar los bloqueos que se produjeron después de las elecciones. Los comicios se celebraron en un ecosistema mediático restringido, lo que redujo las garantías de una participación libre e informada. Además, se bloqueó el acceso a The Wall Street Journal después de que un líder opositor publicara un artículo de opinión crítico. Hasta la fecha, 62 medios de comunicación han sido bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet, lo que afecta a 86 dominios y totaliza 431 bloqueos activos. Además, también se han bloqueado nueve sitios web de organizaciones de derechos humanos, con un total de 41 [bloqueos activos](#). El domingo 5 de agosto, Nicolás Maduro [expresó su intención](#) de regular o bloquear TikTok, Instagram y X en Venezuela, acusando a estas aplicaciones de “ser los principales instrumentos” para aumentar “el odio y el fascismo”.

A pesar de estas medidas represivas, la sociedad civil y los periodistas siguen resistiendo. Iniciativas como Noticias Sin Filtro y El Bus TV, entre otras, han surgido como soluciones creativas para eludir la censura y brindar información crucial al público. El Bus TV, por ejemplo, entrega noticias directamente a la gente mientras viaja en autobuses públicos. Estos esfuerzos subrayan la resiliencia y la adaptabilidad de los venezolanos frente al autoritarismo.

Identificación como control

Al mismo tiempo, activistas de derechos humanos han descubierto que sus pasaportes han sido anulados. El sábado 3 de agosto, la activista Yendri Velásquez fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba viajar a la 113ª Sesión del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Naciones Unidas. El país tiene una larga historia de uso de documentos de identidad como arma política y mecanismo de control; en febrero de 2024, la activista [Rocío San Miguel fue detenida](#) en circunstancias similares y permanece bajo arresto. La forma en que se vincula, utiliza y transfiere la información contenida en estas bases de datos es imposible de determinar sin que existan leyes que protejan la privacidad o impidan las transferencias de datos. A través de estos mecanismos, el gobierno de Maduro ha reprimido el derecho de los venezolanos a moverse libremente, atacando no solo a quienes viven en el país, sino también a los 7,8 millones de venezolanos que viven en la diáspora, mediante amenazas de [negar, retrasar o revocar sus documentos de identidad o incluso su ciudadanía](#).

Mientras Venezuela se desenvuelve en este complejo panorama político, el ámbito digital sigue siendo un campo de batalla crucial. El uso de la tecnología como herramienta de represión pone de relieve la urgente necesidad de contar con una protección sólida de los derechos y las libertades digitales. La situación actual no solo amenaza las libertades individuales, sino que también socava el tejido mismo de la sociedad venezolana, creando una cultura de miedo y sospecha que podría tener consecuencias duraderas.

Los venezolanos en el exterior se esfuerzan por seguir informando de lo que los que están dentro del país ya no pueden. Sin embargo, el brazo propagandístico digital del gobierno se extiende para tratar de silenciar estas voces. La situación es urgente y es imperativo denunciarla. Esto se debe no solo a las numerosas injusticias y las muchas vidas perdidas o perturbadas por las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a que Venezuela sirve de advertencia para otros lugares. La represión en Venezuela refleja estrategias observadas en Nicaragua y Cuba, y podría prefigurar lo que puede venir para muchas otras sociedades, dada la proliferación de la tecnología utilizada para controlar a los ciudadanos, los migrantes y las poblaciones minoritarias, así como el aumento exponencial del autoritarismo.

Llamado a la acción

Ante la crítica situación actual, instamos al gobierno venezolano y a todas las autoridades estatales a que dejen de usar y abusar de las tecnologías para vigilar, reprimir, acosar y perseguir la disidencia política en Venezuela y de restringir el acceso a la información y la libertad de asociación y reunión pacífica. Es esencial que todas las autoridades y quienes ostentan el poder político respeten los derechos humanos, actúen de conformidad con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en particular de quienes cubren los acontecimientos del país, documentan los abusos de los derechos humanos y trabajan para lograr la transparencia total del proceso electoral.

Adicionalmente, hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Opinión, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del

Enviado del Secretario General sobre Tecnología, a la comunidad internacional y a los países que mantienen comunicación regular con el gobierno de Nicolás Maduro a que condenen las violaciones de derechos humanos y el abuso de las herramientas tecnológicas para incrementar el control político y perseguir la disidencia. Estas entidades deben instar directamente al gobierno venezolano a adherirse al derecho internacional en materia de libertad de expresión, asociación y derecho de acceso a internet, contribuyendo así a la protección y restauración del espacio cívico en Venezuela.

Open letter on technology-enabled political violence in Venezuela

We, the undersigned organizations and members of the global human rights community, urgently call for unfettered access to the internet, social media platforms, and other communication channels for the people in Venezuela at all times. We also demand an end to the use of technological tools and digital platforms for the surveillance and persecution of political dissent, particularly in the wake of the presidential elections of July 28. This commitment is crucial to respect the rights enshrined in Venezuela's Constitution and the country's international commitments.

The [crisis in Venezuela](#), which erupted following the recent presidential elections, has seen a significant deployment of the surveillance and control apparatus that the Venezuelan state has built up over recent years. This apparatus intersects with various elements related to communication technologies and has been repeatedly denounced by civil society and organizations defending internet freedom in the country. Nicolás Maduro's government [declares](#) that it has arrested over 2,000 people in the past week, and the numbers of people killed and disappeared are unclear, with most sources indicating that at least [20 people have been killed in the protests](#), while another 25 have been forcibly disappeared. We are witnessing the consequences of a complex system created by more than 20 years of public policies and insidious political initiatives. This combines multiple restrictions on access to information through censorship, the decline of communication infrastructure, systematic harassment, information operations, and the closure of news outlets. Additionally, it employs surveillance technologies applied to intricate networks of interests and, in many cases, a population cornered by poverty.

Venezuela's sociopolitical environment is marked by a complex interplay of authoritarian governance, economic instability, and social unrest. Under Maduro's rule, the state has increasingly relied on repressive measures to maintain control, including widespread surveillance, censorship, and the suppression of dissent. As the recent presidential elections have shown, a dominant and increasing portion of the population is aggrieved by the ruling party's mismanagement and human rights abuses. Economic conditions remain dire, due to the effects of hyperinflation, food and medicine shortages, and widespread poverty exacerbating the crisis. These challenges have fueled a growing sense of discontent and rebelliousness among Venezuelans, leading to frequent protests and an increasing figure of [7.8 million people](#) who have fled the country, seeking better opportunities abroad or attempting to escape political violence. In this climate, the government has continued to increase its grip over the population through digital and physical means, further eroding democratic norms and limiting avenues for peaceful opposition.

Technology in the wake of elections

In the aftermath of the presidential elections on July 28, there has been violent repression by police, military, and paramilitary groups, as well as reports of harassment and persecution strategies enabled by the use of technology. The government has intensified its digital surveillance and censorship measures, using tools such as messaging app VenApp to report on dissenting activities and to dox demonstrators, video surveillance to monitor protests, and patrolling drones to provoke widespread fear.

VenApp represents the latest evolution in this surveillance apparatus. The application, which has raised significant concerns about privacy and state surveillance since its launch in December 2022, has now been [promoted](#) by President Nicolás Maduro as a means for citizens to report on their neighbors, further entrenching a culture of surveillance and control. It now incorporates features that allow users to tip authorities off about activities deemed suspicious by the state, covering categories such as “guarimba fascista” (a term used to describe opposition protests), looting, public disorder, and even “disinformation,” which targets journalists. The integration of digital platforms into [Chavismo’s](#) practices of persecution follows a decades-long pattern of creating a system of punishment and rewards to obtain social intelligence through accusations of political dissidence, embedded in society through a structure of local party “street bosses” and snitches known as “Patriotas Cooperantes.” Viewing any democrat challenging their power as a potential conspirator or destabilizer, the government has fostered an environment of mistrust and surveillance, targeting those it perceives to be internal enemies.

There are frequent reports of security forces stopping citizens to check the content of their phones, including photos, social media accounts, and WhatsApp conversations. People are being detained based on the content found during these searches, including pictures or discussions of protests or examples of anti-government speech.

This framework has evolved with the implementation of the “Carnet de la Patria” and the “Sistema Patria,” which are digital identification systems linked to social welfare programs. These systems not only track citizens’ activities but also collect vast amounts of personal data, often without consent. [The surveillance system](#) reports directly to the Office of the President. The Strategic Center for Security and Protection of the Homeland, which is under the President’s direct supervision, is responsible for overseeing all state security operations. The National Telecommunications Commission is in charge of monitoring telephone communications and internet traffic. The Sistema Patria (Homeland system) is a part of the Patria Foundation, which falls under the Vice-Presidency. The Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN), a security force responsible for political intelligence and counterintelligence, as well as the Directorate of Military Counterintelligence, have direct access to phone monitoring and street surveillance.

Social media and technology for surveillance

Additionally, security forces have been actively monitoring social media and asking their supporters to report any dissident online activity, so as to [arrest people and raid homes](#) and offices without warrants. These people are then denied access to a fair and just trial, and are placed in “[reeducation centers](#)” where, in the words of Nicolás Maduro, “there will not be forgiveness.” This occurs in the context of what is known as “[Operación Tun Tun](#)” (Operation knock-knock), which

includes the use of Instagram, Telegram, and X (formerly Twitter) accounts to dox dissidents' names, photos, and addresses, particularly those activists and journalists, but also including regular citizens who served as polling station witnesses during the elections. Often the doxing is done by their own neighbors.

Political leaders from Maduro's government have been using their social media accounts, as well as national media, to expose and intimidate dissidents, as illustrated by Chavismo's strongman [Diosdado Cabello going through users' tweets](#) on his TV show.

This digital clampdown not only curtails Venezuelans' fundamental rights, but also underscores the regime's reliance on technology as a means to maintain power and to quell dissent in a politically volatile environment. The election's aftermath thus highlights a broader strategy of digital authoritarianism, where the state uses advanced technologies to enforce compliance and silence opposition.

Furthermore, the Venezuelan government has been using surveillance technology to persecute dissent for many years. Chinese tech company [ZTE has been exporting surveillance technology](#) to Venezuela since at least 2016, and in 2021, Maduro's government publicly admitted to owning [phone-hacking tech made by Israeli firm Cellebrite](#), used to intervene and surveil dissidents' devices. In 2022, Telefónica, which operates in Venezuela as Movistar, [reported](#) having intercepted the communications of over 1.5 million (1,584,547) subscribers in Venezuela during the previous year, which represents one in every five telephone or internet line users.

Censorship and internet filtering

As reported by the Venezuelan NGO *Conexión Segura y Libre*, there were at least 12 new cases of blocking against media outlets, human rights organizations, and a VPN during the electoral campaign, not including the blockings that took place after the elections. The elections were held in a restricted media ecosystem, reducing guarantees for free and informed participation. Furthermore, access to *The Wall Street Journal* was blocked after an opposition leader published a critical op-ed. To date, 62 media outlets have been blocked by the largest internet service providers, affecting 86 domains, and totalling 431 active blocking events. In addition, nine human rights organizations' websites have also been blocked, with a total of 41 [active blocking events](#). On Sunday, August 5, Nicolás Maduro [expressed his intention](#) to regulate or block TikTok, Instagram and X in Venezuela, accusing these apps of "being the main instruments" to increase "hatred and fascism."

Despite these repressive measures, civil society and journalists continue to resist. Initiatives like Noticias Sin Filtro and El Bus TV, among others, have emerged as creative solutions to bypass censorship and provide crucial information to the public. El Bus TV, for instance, delivers news directly to the people while they travel on public buses. These efforts underscore Venezuelans' resilience and adaptability in the face of authoritarianism.

Identification as control

At the same time, human rights activists have discovered that their passports have been annulled. On Saturday, August 3, activist Yendri Velásquez was detained at the airport while attempting to travel to the United Nations' 113th Session of the Committee on the Elimination of All Forms of

Discrimination. The country has a long history of using identity documents as a political weapon and a mechanism of control; in February 2024, activist [Rocío San Miguel was detained](#) under similar circumstances and remains under arrest. The way in which the information contained in these databases and how the data is linked, used, and transferred is impossible to ascertain without any laws in place to protect privacy or prevent data transfers. Through these mechanisms, Maduro's government has cracked down on the Venezuelans' right to move freely, attacking not only those who live in the country, but also the 7.8 million Venezuelans living in the diaspora, through threats of [denying, delaying or revoking their ID documents or even their citizenship](#).

As Venezuela navigates this complex political landscape, the digital realm remains a critical battleground. The use of technology as a tool for repression highlights the urgent need for robust protections of digital rights and freedoms. The current situation not only threatens individual liberties but also undermines the very fabric of Venezuelan society, creating a culture of fear and suspicion that could have long-lasting consequences.

Venezuelans abroad strive to continue reporting what those within the country are no longer able to. However, the government's digital propaganda arm stretches out to try to silence these voices. The situation is urgent and it is imperative to speak out against it. This is not only because of the numerous injustices and the many lives lost or disrupted by the state's security forces, but also because of how Venezuela serves as a warning for other places. The repression in Venezuela echoes strategies seen in Nicaragua and Cuba, and could foreshadow what may be to come for many other societies, given the proliferation of technology used to control citizens, migrants, and minority populations, as well as the exponential rise in authoritarianism.

Call to action

In light of the current critical situation, we urge the Venezuelan government and all state authorities to cease using and abusing technologies to surveil, repress, harass, and persecute political dissent in Venezuela and to curtail access to information and freedom of association and peaceful assembly. It is essential that all authorities, and those who hold political power respect human rights, act in accordance with international standards to ensure the safety of all citizens, particularly those covering the country's events, documenting human rights abuses, and working on achieving full transparency over the electoral process.

Additionally, we call on the Organization of American States (OAS), the OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression (RELE), the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, the UN High Commissioner for Human Rights, the Office of the Secretary-General's Envoy on Technology, the international community, and countries in regular communication with Nicolás Maduro's government to condemn the violations of human rights and the abuse of technological tools to increase political control and persecute dissent. These entities should directly urge the Venezuelan government to adhere to international law concerning freedom of expression, association and the right to access the internet, thereby contributing to the protection and restoration of civic space in Venezuela.

Firmas /Signatories

Organizaciones

Acceso Libre

Access Now

Acción Ciudadana

Azerbaijan Internet Watch

Center on Race & Digital Justice

Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet (CLISI)

Centro de Justicia y Paz – Cepaz

Colectivo +Voces (Cuba)

comun.al, Laboratorio de resiliencia digital

Conexo

Conexión Educativa

Conexión Segura y Libre / VE sin Filtro

Cooperativa Sulá Batsú

Derechos Digitales

Digital Action

Digital Grassroots

Digital Rights Foundation

Equality Labs

Fight for the Future

Freedom House

Fundación Internet Bolivia

Fundación Karisma

Gobierno y Análisis Político AC

ININCO-UCV

Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología – IPANDETEC

Jonction, Senegal

Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc, Uruguay)

LaLibre.net Tecnologías Comunitarias

Majal.org

Myanmar Internet Project

Numun Fund

ONG Amaranta

ProBox

RedesAyuda

Robert F. Kennedy Human Rights

@segudigital

Ser Valiente en Red

SocialTIC

The CESI Foundation

The Distributed AI Research Institute (DAIR)

Tifa Foundation, Indonesia

Ubunteam

Washington Office on Latin America (WOLA)

Whistleblower Aid

Whose Knowledge?

Witness

Individuales

Alejandra Stolk

Alejandro Mayoral Baños, Indigenous Friends Association (IFA)

Alejandro Pisanty, UNAM, Mexico

Alex Argüelles, comun.al

Alex Hanna, DAIR

Andrés Cañizález, Medianálisis

Anabella Botbol

Ann Toklikishvili

Armando Chaguaceda, politólogo, Investigador Principal GAPAC

Arturo Rodriguez

Arzu Geybulla

Beth Frondoso

Carlos Arcila Calderón, USAL

Carlos Guerra

Connie Moon Sehat

Daniel Levine

David Aragort

Débora Calderón

Diego Area

Dr. Aymen Zaghdoudi, media law professor

Elaine Ford, Democracia Digital

Eliana Quiroz, Fundación Internet Bolivia

Erick Rozo

Fabiola Velasco

Génesis Luigi-Bravo, Yale University

Giovana Fleck

Hannah Draper

Harun Bala

Iria Puyosa

Jac sm Kee

John Polga-Hecimovich

José Arraiza, independent researcher

José Gutiérrez, independent researcher

José J. Nieves (Colectivo +Voces)

José Luis Mendoza, CLISI

Juan de Brigard, independent researcher

Krystal Kauffman, DAIR

Laura Vidal, independent researcher

Libby Liu, Whistleblower Aid

Lisa Schirch, University of Notre Dame

Liz Orembo, Research ICT Africa

Luis Carlos Díaz

Luisa F. Isaza Ibarra

Lucía Camacho G.

Marianne Díaz Hernández, Access Now/Acceso Libre

María Eugenia Grillet, investigadora, Universidad Central de Venezuela

María Gabriela Trompetero, investigadora, Universidad de Bielefeld, Alemania

María Isabel Puerta, politóloga investigadora, Valencia College/GAPAC

Maria Ressa

Mario Torre

Melanio Escobar, RedesAyuda

Muhammed Bello Buhari, Digital Grassroots

Nevin Thompson

Patricia Díaz Charquero, DATA Uruguay | Datysoc

Prof. Marta De la Vega, USB, UCAB.

Prof. Silvia Pedraza, University of Michigan

Raisa Urribarri, Universidad de Los Andes

Raphael Tsavkko Garcia, Journalist

Raul Sanchez Urribarri, La Trobe University

Ria Shibata, Toda Peace Institute

Ricardo Rosales

Richard Walakira

Rima Sghaier

Robert Valencia

Robert Todoroski

Romina Navarro

Rui Santos

Silvia María Calderón López

Timnit Gebru, DAIR

Valentina Aguana, Conexión Segura y Libre

Verónica Arroyo

Yamlek Mojica, Access Now

Wafa Ben-Hassine, human rights lawyer